



INFORME

Realizado por Fundación para la Libertad
de Prensa (FLIP)

Publicado

ESPIONAJE CONTRA PERIODISTAS: LA JUSTICIA TIENE LA PALABRA

Informe sobre las operaciones ilegales de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra periodistas.

• 3 de diciembre de 2010 | Bogotá, Colombia

CONTENIDO

Haga click sobre cada capítulo.

<i>Introducción</i>	2
<i>Capítulo 1: Antecedentes</i>	5
<i>Capítulo 2: Las prácticas ilegales del das</i>	6
<i>Capítulo 3: Periodistas afectados</i>	12
<i>Capítulo 4: Avances en las investigaciones</i>	19
<i>Capítulo 5: Problemas de acceso a la información en el cubrimiento periodístico del caso</i>	29

Las investigaciones judiciales han comprobado que la estrategia no solo se limitaba a hacer espionaje, si no que desde el DAS se inició una campaña de intimidación y desprestigio contra periodistas.

INTRODUCCIÓN

El escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, a varias personalidades, entre ellas periodistas, ha sido uno de los principales ataques contra la libertad de prensa en los últimos años en Colombia. Desde febrero de 2009 varios medios de comunicación denunciaron que este organismo espiaba periodistas, amenazaba de muerte a algunos de ellos, desataba campañas de desprestigio contra otros, y también hostigaba y perseguía a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y políticos opositores. Casi dos años después, las investigaciones judiciales han confirmado las denuncias periodísticas, han revelado nuevos y más escabrosos hechos y la justicia ha proferido las primeras condenas y sanciones disciplinarias.

Según las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, el propósito de interceptar las comunicaciones y seguir los movimientos de los periodistas era conocer sus fuentes y saber qué tipo de investigaciones realizaban, sobre todo, aquellos reporteros más críticos del gobierno. Las investigaciones judiciales han comprobado que la estrategia no solo se limitaba a hacer espionaje, si no que desde el DAS se inició una campaña de intimidación y desprestigio contra periodistas. En el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, se comprobó la existencia de un manual para amenazarla creado desde el DAS.

En febrero de 2010, directivos de la FLIP se reunieron con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para discutir el informe “Interceptaciones y seguimientos ilegales: grave intimidación al periodismo colombiano”, el cual hacía el recuento de la situación de libertad de prensa en Colombia durante 2009, haciendo especial énfasis en el espionaje contra periodistas que se hizo desde el DAS.

La Fiscalía investiga a 52 funcionarios del DAS, de los cuales 18 están detenidos y siete de ellos, de nivel directivo, ya confesaron su participación en los hechos denunciados. Además, a dos personas ya se les fijó una pena y serán condenadas próximamente.

En ese entonces, el presidente Uribe, acompañado por el Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, el Director del DAS, el Director de la Policía y el Secretario de Prensa de Palacio, entre otros, si bien dijo que “quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte, es enemigo del gobierno”, también declaró, bastante molesto, que las denuncias sobre el espionaje buscaban “inculpar a inocentes”.

El Presidente hacía referencia a una información publicada por la FLIP acerca del inicio de investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría General de la Nación, contra Bernardo Moreno, secretario General de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa de Palacio, y Jorge Mario Eastman, viceministro de Defensa.

Ocho meses después de esa reunión, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos, a Bernardo Moreno al considerar que se extralimitó en sus funciones. El Procurador le dio la misma sanción a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y a Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). También impuso sanciones más reducidas, al ex director del DAS Andrés Peñate, entre otros funcionarios.

La Fiscalía investiga a 52 funcionarios del DAS, de los cuales 18 están detenidos y siete de ellos, de nivel directivo, ya confesaron su participación en los hechos denunciados. Además, a dos personas ya se les fijó una pena y serán condenadas próximamente. Se trata de Jorge Alberto Lagos, ex director General de Contrainteligencia, y Fernando Tabares, ex director General de Inteligencia, quienes firmaron respectivos preacuerdos con la Fiscalía, lo que les permitió rebaja de penas a cambio de su confesión. Ambos pagarán ocho años de cárcel.

Otros funcionarios que se han acogido al principio de oportunidad son Martha Inés Leal, subdirectora de Operaciones de Inteligencia, y los detectives Germán Ospina y Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’. A todos estos funcionarios ya se les han imputado cargos y de no hacer el acuerdo con la Fiscalía sus penas podrían ser de más de 16 años de prisión.

Si bien las investigaciones judiciales sobre el espionaje en general han avanzado, se han esclarecido varios hechos y se han identificado responsables, preocupa que es muy poca la información detallada que se tiene sobre el caso de los periodistas.

El Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, imputó cargos contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de confianza pública y falsedad en documento público. No obstante, tras ser elegida la nueva fiscal, Vivianne Morales, se retiró la imputación para que Morales tenga tiempo suficiente de conocer el caso y pueda sustentar el acervo probatorio en el juicio. Posiblemente ella vuelva a radicar la solicitud.

Hurtado salió del país y buscó asilo político en Panamá alegando que la justicia colombiana no le ofrecía garantías, pues se estaba filtrando información reservada que perjudicaba su caso. El gobierno panameño se la concedió.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, organismo competente para investigar a los presidentes y ex presidentes de la República, abrió investigación preliminar contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez para indagar si tuvo o no injerencia en las actuaciones ilegales del DAS.

De otro lado, en la actualidad se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual será liquidado el DAS para dar vida a la nueva Agencia Central de Inteligencia, con el fin de lograr una depuración total de dicha entidad.

Si bien las investigaciones judiciales sobre el espionaje en general han avanzado, se han esclarecido varios hechos y se han identificado responsables, preocupa que es muy poca la información detallada que se tiene sobre el caso de los periodistas. ¿Hace cuánto se hace espionaje a periodistas? ¿Cuántos periodistas fueron víctimas? ¿Quiénes dieron la orden y participaron en las campañas de desprestigio? ¿Quiénes hicieron el manual para amenazar a una periodista? Todavía hay varias preguntas que no se han respondido.

A su vez, el asilo político concedido a la ex directora María del Pilar Hurtado en Panamá dificulta el esclarecimiento de los hechos e impide el derecho de las víctimas a conocer lo que realmente sucedió.

A lo largo de la investigación judicial y disciplinaria realizada por las autoridades colombianas se ha podido establecer que existieron dos periodos de actividades ilegales del DAS.

La FLIP insta a la administración de justicia a que continúe con las investigaciones y entregue más información sobre el espionaje a periodistas. Además, le hace un llamado a los procesados y a los testigos, a que colaboren con los procesos judiciales y entreguen la información que permita conocer la verdad y encontrar a todos los responsables.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES

Las primeras denuncias sobre las interceptaciones y seguimientos ilegales las realizó en octubre de 2008 el entonces senador del partido de oposición, Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, quien hizo público que estaba siendo objeto de este tipo de prácticas. La directora en ese momento del DAS, María del Pilar Hurtado, reconoció que las interceptaciones existieron pero aseguró que fueron por decisión de un funcionario que actuó sin su consentimiento. Se refería a Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador del Grupo de Inteligencia Política del DAS. Hurtado añadió que asumiría la responsabilidad política: “hubo un error y estoy dispuesta a renunciar”, dijo. Finalmente, tanto Hurtado como Ovalle salieron de sus cargos.

La Fiscalía anunció una investigación por este incidente. Aún no se habían conocido resultados de esta pesquisa, cuando en febrero de 2009, la revista Semana denunció que el escándalo era más grande de lo que se creía, pues no sólo Petro era espiado sino muchas otras personalidades.

Tras conocerse la publicación, la Fiscalía allanó las oficinas del DAS el 23 de febrero de 2009 e incautó computadores, discos duros, documentos impresos, carpetas y material probatorio para la investigación. Además, según el recién nombrado director de DAS en ese entonces, Felipe Muñoz, puso a disposición de las autoridades cualquier información adicional que se necesitara.

A lo largo de la investigación judicial y disciplinaria realizada por las autoridades colombianas se ha podido establecer que existieron dos periodos de actividades ilegales del DAS.

En el primero, durante la administración del ex director de la entidad Jorge Noguera Cotes (2002 – 2006), se ha podido establecer que funcionarios del DAS entregaron a paramilitares bases de datos de sindicalistas que posteriormente fueron asesinados. Además, se ordenaron amenazas contra varias de las personas espiadas ilegalmente y se ejecutaron estrategias de desprestigio y sabotaje contra diversas personalidades, incluyendo a los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque.

En el segundo periodo, del que hicieron parte las administraciones de los ex directores Andrés Peñate (noviembre de 2005 – agosto de 2007) y María del Pilar Hurtado, (agosto de 2007 – octubre de 2008) se realizó una campaña sistemática de espionaje y desprestigio, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia. Además, se ordenó espiar a periodistas que habían realizado investigaciones que comprometían a personas allegadas al gobierno del presidente, Álvaro Uribe, como es el caso del director de Noticias Uno, Daniel Coronell, o a periodistas críticos de las políticas de gobierno, como Carlos Lozano, director del semanario Voz.

CAPÍTULO 2: LAS PRÁCTICAS ILEGALES DEL DAS

Primera etapa: Amenazas, asesinatos y persecuciones masivas

Durante la administración de Jorge Noguera, según la acusación de la Fiscalía, el DAS colaboró con grupos paramilitares en acciones delictivas y el ex funcionario directivo enfrenta hoy juicio ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía sostiene que el DAS llegó incluso a entregarle a las autodefensas listas de sindicalistas para que fueran asesinados. La Fiscalía también señala a Noguera por su presunta participación en amenazas, interceptaciones y seguimientos ilegales contra opositores y periodistas.

La justicia también investiga al entonces sub director del organismo, José Miguel Narváez, de haber participado en estas actividades.

Los primeros hechos del escándalo de las interceptaciones ilegales que conoció la opinión pública datan de la administración de Noguera. En el allanamiento de la Fiscalía del 23 de febrero de 2009 al DAS, la mayor parte del material incautado corresponde a los años 2004 a 2006.

Los primeros hechos del escándalo de las interceptaciones ilegales que conoció la opinión pública datan de la administración de Noguera. En el allanamiento de la Fiscalía del 23 de febrero de 2009 al DAS, la mayor parte del material incautado corresponde a los años 2004 a 2006.

Lo primero que se conoció es que en el DAS existía un grupo que se llamaba G-3, coordinado por Jaime Fernando Ovalle – quien falleció en 2010 – y era el encargado de realizar todas las actividades de interceptaciones, seguimientos y desprestigio.

Según lo prueban distintas órdenes y documentos internos en manos de la Fiscalía, el propósito de estas actividades era “neutralizar el accionar” de periodistas opositores y críticos del gobierno a través de diferentes estrategias como el descrédito, las amenazas y las persecuciones. Se buscaba además judicializar a las personas que eran espiadas.

Para esto se documentaba la hoja de vida de las víctimas con datos biográficos, profesionales, personales (vida familiar e íntima), registro de entradas y salidas al país, y datos financieros consignados en las centrales de información crediticia, Datacrédito y Cifín. Para esto último se contó con la colaboración de otra entidad estatal, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia del Ministerio de Hacienda que tiene el propósito de hacer seguimiento bancario a dineros provenientes del narcotráfico. Esta entidad también actuó ilegalmente al no requerir orden judicial para dichos seguimientos, como lo confirmó recientemente la Procuraduría.

Además, se hacían seguimientos exhaustivos a las actividades de las víctimas, de quienes se hacían informes completos de actividades en “tiempo real”.

Un documento encontrado por la Fiscalía en el DAS es una presentación de PowerPoint titulada “La Guerra Política”. Los investigadores encontraron que este archivo es un completo manual para hacer amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio, montajes y falsas denuncias contra algunas ONG de derechos humanos (nacionales e internacionales), opositores y extranjeros “incómodos para el gobierno”.

Hasta el momento, ni las investigaciones judiciales ni las declaraciones de los sindicatos o los testigos, han hecho referencia a estos manuales. Se desconoce quién dio la orden y quienes lo implementaron.

- Según el documento, las estrategias de la “guerra política” fueron las siguientes:
- Desprestigio: Elaborar libros, videos u otros documentos para desprestigiar organizaciones y/o opositores.
 - Presión: Intimidaciones y amenazas.
 - Sabotaje: Impedir la publicación de libros de las ONG (por medio de asalto a camiones de distribución) o evitar la realización de cualquiera de las actividades de estas organizaciones.
 - La guerra jurídica: Elaboración de montajes y falsas denuncias para judicializar a los ‘blancos’.

También se encontraron documentos en que hablan de las estrategias contra personas u organizaciones específicas (Vea más adelante el caso del periodista Hollman Morris).

Hasta el momento, ni las investigaciones judiciales ni las declaraciones de los sindicatos o los testigos, han hecho referencia a estos manuales. Se desconoce quién dio la orden y quienes lo implementaron.

Uno de los asuntos más delicados que quedaron al descubierto con este escándalo es que el espionaje hecho a personalidades que contaban con medidas de protección del Estado, en ocasiones era realizado por los propios escoltas que se suponía los estaban cuidando. Es decir, algunos agentes del DAS, al tiempo que brindaban protección, realizaban labores de inteligencia en contra de sus protegidos.

Uno de los documentos que demuestran la realización de estas prácticas, es un memorando del 4 de marzo de 2004 en el que Jaime Fernando Ovalle solicita al subdirector de Fuentes Humanas del DAS que, con propósitos de inteligencia, se adelanten actividades para “reclutar fuentes que hacen parte de los esquemas de seguridad” de varias personas que eran espiadas. Periodistas como Hollman

Morris y Claudia Julieta Duque, habían manifestado a la FLIP desde hace varios años que detectaban irregularidades constantes en las actividades de sus escoltas.

De hecho, el informe del CTI declara que “existen anexos de carpetas que son propias de la oficina de Protección Especial y de la coordinación de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas (del DAS), donde encontramos estudios de seguridad, informes de los detectives que hacen parte del esquema de seguridad de estas personalidades, donde se indican los desplazamientos rutinarios y fuera de la sede de los protegidos y datos que detallan la constitución de esquemas (vehículos, armas, número de escoltas, turnos, etc.)”. Esto demostraría que información confidencial sobre los periodistas, propia de las labores de protección que cumplía el DAS dentro del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, fue filtrada al G-3 para la realización de las labores de inteligencia.

Hoy en día la mayoría de los esquemas de seguridad son administrados por una empresa privada contratista del Ministerio del Interior y de Justicia, que ha ido sustituyendo paulatinamente los del DAS.

Amenazas desde el DAS

Así mismo, la Fiscalía halló documentos que hacer sospechar que desde el G-3 no solo se hacían interceptaciones y seguimientos, sino que también se amenazaban a algunas de las personas que eran espiadas.

Tal es el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de la emisora de Internet de derechos humanos Radio Nizkor y quien fue investigadora del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Se trataba de una orden rotulada como “Uso exclusivo del DAS”, en la cual se solicitaba amenazar telefónicamente a la periodista y se daban instrucciones precisas para llevar a cabo esta actividad delictiva, incluyendo el texto de la amenaza.

El documento tenía datos como: número telefónico al cual se debía hacer la llamada y los correos electrónicos en su defecto, nombre completo de la

periodista, su cargo y características de seguridad de su residencia (haciendo la salvedad de que Duque contaba con identificador de llamadas en su teléfono fijo). Además, hacía las siguientes “recomendaciones”:

- “Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de inteligencia de la Policía.
- No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
- Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelvan la llamada.
- Constatar que en el perímetro no hayan cámaras de seguridad, así sean de tránsito.
- Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.
- Extremar las medidas preventivas dado de Claudia Julieta avisará inmediatamente al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente”.

También estaba transcrito el texto exacto con el cual debía ser amenazada: “Señora, es usted la mamá de... (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni ‘carticas’ chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja HP....”.

En efecto, el 17 de noviembre de 2004 Duque recibió una llamada en la que se le amenaza casi con palabras idénticas, como consta en la [alerta emitida por la FLIP](#) el 29 de noviembre de dicho año.

Todavía no se ha podido establecer los responsables de esta temible persecución. Las investigaciones judiciales no han ahondado sobre el tema, ni los testigos han mencionado algo al respecto.

Para más detalles acerca de los documentos que demuestran este tipo de actividades consulte el [informe anual de la FLIP de 2009](#).

Segunda etapa: el espionaje del DAS

Según ha documentado la Fiscalía, luego de diferentes declaraciones de los testigos vinculados al caso, el DAS habría infiltrado a la Corte Suprema de Justicia reclutando, como espías, a personal de servicio que grabaron plenarias al interior de la Corte, accediendo así a información reservada de los procesos penales que ésta adelantaba y seguimiento de las actividades de los magistrados.

La principal testigo de este caso es la ex detective del DAS, Alba Luz Flórez. En declaración de Flórez entregada a la Fiscalía entre el 24 de mayo y el 8 de junio de 2010, la ex funcionaria confesó que ella fue delegada para liderar esta tarea y explicó la forma como reclutó fuentes humanas para esta labor, denominada al interior del DAS como operación ‘Escalera’.

Según Flórez, la orden de penetrar la Corte la recibió del jefe de la subdirección de Fuentes Humanas, William Romero. Durante varios meses, la detective se hizo pasar por vendedora de productos de belleza y de esta forma se aproximó a los empleados de la cafetería de la Corte Suprema. Poco a poco se fue ganando la confianza de dos de las aseadoras del organismo. Flórez confesó cómo se usaron gastos reservados del DAS para hacerle regalos a dichas señoras y luego convencerlas de ingresar micrófonos y grabadoras a la sala penal de la Corte Suprema, para escuchar los debates sobre las investigaciones que los magistrados estaban realizando. La Corte adelantaba procesos sobre políticos presuntamente vinculados con grupos paramilitares, en el escándalo de la ‘para-política’.

El contenido de las grabaciones fue tan amplio que, según Flórez, la propia directora Hurtado la felicitó por su trabajo. La Fiscalía tiene copias de grabaciones en CD y documentos para soportar la confesión de la detective.

Por otra parte, Flórez también declaró que contactó a funcionarios de seguridad de la Corte Suprema para convencerlos de que le ayudaran a reclutar fuentes al interior de los esquemas de seguridad de los magistrados. De esta manera, varios escoltas de los magistrados de la Corte le brindaron información sobre las

Según el relato de los testigos y la información que ha recolectado la Fiscalía y algunas víctimas, se puede establecer que hasta el momento cinco periodistas fueron de alguna forma espiados, amenazados o desprestigiados por el DAS del 2003 al 2008.

actividades de sus protegidos. Todo esto a cambio de obsequios como electrodomésticos, mercados y dinero en efectivo, incentivos que fueron pagados con gastos reservados del erario público.

A través de estas fuentes, la infiltrada también logró obtener los expedientes de algunos funcionarios o personas cercanas al gobierno investigadas por sus presuntas relaciones con paramilitares, entre ellos el del ex senador Mario Uribe, primo del ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así mismo, sus fuentes extrajeron de la Corte declaraciones de jefes paramilitares que implicaban a dichas personas investigadas.

CAPÍTULO 3: PERIODISTAS AFECTADOS

Según el relato de los testigos y la información que ha recolectado la Fiscalía y algunas víctimas, se puede establecer que hasta el momento cinco periodistas fueron de alguna forma espiados, amenazados o desprestigiados por el DAS del 2003 al 2008. Aunque la Fiscalía en varias providencias habla del espionaje a periodistas, sin especificar nombres y otros reporteros salen mencionados en algunas comunicaciones del DAS, la justicia no ha aclarado cuántos periodistas más fueron víctimas del seguimiento ilegal.

Claudia Julieta Duque

Cómo se documenta en el [informe anual de la FLIP 2009](#), la periodista fue una de las víctimas más acosadas por el DAS, no sólo por el espionaje exhaustivo y el acoso que se le realizó, sino porque, como se mencionó anteriormente, se fabricaron amenazas de muerte contra ella, durante la dirección de Noguera Cotes.

Según el informe del CTI de abril de 2009, dentro de la información incautada al DAS se encontró una completa bitácora de actividades de la periodista durante

diferentes periodos, con especificaciones de fechas, horas, sitios y personas con las que se había reunido. También se encontró un informe de inteligencia de seis páginas que cuenta con datos biográficos de la periodista, experiencia laboral, anotaciones sobre quejas presentadas por Duque acerca de su esquema de protección y comunicados relacionados con ella, entre el 24 de febrero y el 22 de noviembre de 2004. También se encontró una foto de la hija de la periodista tomada desde el interior del colegio en donde estudiaba.

Actualmente, la Fiscalía lleva un proceso por los delitos cometidos contra Claudia Julieta Duque. A finales de julio de 2010, la FLIP le envió una carta al fiscal que conoce el caso, instándolo a que se dé una mayor celeridad en el proceso. Hasta la fecha, su caso sigue en etapa de investigación.

Por otro lado, Duque se ha quejado varias veces sobre la dificultad que hay para acceder a la información durante las audiencias de juzgamiento que lleva la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera. La FLIP pudo constatar que hubo inconvenientes para acceder a la declaración de una de las testigos contra Noguera durante una audiencia pública, Martha Inés Leal, luego de que ella solicitara que la prensa fuera retirada de una audiencia aduciendo que las publicaciones de los medios habían generado amenazas en su contra (ver más adelante capítulo sobre acceso a la información).

Hollman Morris

La Fiscalía encontró una gran cantidad de informes del DAS referentes a las actividades ilegales contra Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’, en el cual se hacen constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia. Para ver con detalle los documentos que demuestran estas actividades del DAS contra el periodista consulte el [informe anual 2009 de la FLIP](#).

La mayoría de estos informes del DAS sobre Morris aparecen dentro de una carpeta denominada “Caso Puerto Asís” y sus primeros documentos datan del año 2004. Vale la pena recordar que en agosto de 2004, el periodista había tenido un

Morris considera que le negaron la visa por el plan que el DAS venía gestionando desde hacía varios años y que quedó plasmado en un documento secreto de ese organismo. Morris había denunciado la existencia de dicho documento en febrero de 2010, seis meses antes de que le fuera negada la visa.

altercado público con el entonces presidente Uribe luego de haber llegado a hacer el cubrimiento de un atentado de las FARC cerca al municipio de Puerto Asís, Putumayo. En dicha oportunidad el Presidente tildó a Morris de “terrorista” por haber llegado al lugar, sugiriendo una relación entre el comunicador y el atentado. Unos días después, Uribe se retractó en un comunicado difundido en la página web de la Presidencia.

Luego de varias hojas sobre datos biográficos del periodista, el documento tiene el título “Cursos de acción” y se refiere a “Iniciar campaña de desprestigio” a través de realización de comunicados, inclusión en un video sobre las FARC y la gestionar de la suspensión de su visa estadounidense, entre otros.

Recientemente, el periodista Morris ganó una beca para estudiar un año en la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos y el gobierno de ese país le negó la visa en primera instancia en julio de 2010.

Para Morris, no cabe duda de que le negaron la visa por el plan que el DAS venía gestionando desde hacía varios años y que quedó plasmado en el documento secreto anteriormente mencionado. Morris había denunciado la existencia de dicho documento el 16 de febrero de 2010, seis meses antes de que le fuera negada la visa.

Tras una fuerte presión internacional de organizaciones de prensa y de derechos humanos, el Departamento de Estado estadounidense reversó su decisión y Morris pudo viajar a ese país.

En abril de 2006 había comenzado a circular internacionalmente un video, supuestamente hecho por paramilitares, que relacionaba a varias personalidades colombianas con la guerrilla de las FARC, entre ellas el periodista Hollman Morris, el sacerdote Javier Giraldo y la ex alcaldesa de Apartadó, Antioquia, y líder opositora Gloria Cuartas. Este video le ocasionó al periodista varias amenazas de muerte en su contra por parte de personas que lo contactaron telefónicamente y lo acusaron de guerrillero. La FLIP en su momento denunció el hecho, a través de la siguiente [alerta publicada el 12 de abril de 2006](#).

La Procuraduría emitió un fallo disciplinario importante al sancionar a Blanca Cecilia Rubio, detective del DAS encargada de la mayor parte de seguimientos a Morris.

En este hecho también se pudo confirmar la participación del DAS. Martha Inés Leal, ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia, dijo en su declaración ante la Fiscalía el 28 de octubre de 2010, que el organismo de inteligencia realizó varios videos para desprestigiar a diferentes personas, entre ellas al periodista Morris.

La Procuraduría emitió un fallo disciplinario importante para la libertad de expresión, al sancionar a Blanca Cecilia Rubio, detective del DAS encargada de la mayor parte de seguimientos a Morris. (Ver más adelante en ‘Decisiones Disciplinarias’).

Daniel Coronel y Noticias Uno

El CTI afirma en el informe del abril de 2009 que dentro de las carpetas del DAS se encontró una orden para interceptar varios correos electrónicos, entre ellos el de Daniel Coronell, director ‘Noticias Uno’, noticiero de televisión que ha realizado varias investigaciones y denuncias contra la administración de Álvaro Uribe Vélez.

Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, dijo a la FLIP que no sólo el correo electrónico de Coronell estaba interceptado, sino también todo el servidor de correos del equipo de trabajo del noticiero. Agregó que él también fue víctima de seguimientos, al igual que Juan Luis Martínez, periodista del noticiero que cubre la fuente de la Presidencia de la República.

Según dijo el periodista Martínez a la FLIP, en 2009, cuando Noticias Uno investigaba el caso de las zonas francas adjudicadas a los hijos del presidente Uribe, él llamó al secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velázquez, para preguntarle por una información de otro tema. Martínez se vio sorprendido cuando Velázquez le preguntó: “¿Ustedes por qué están investigando a los hijos del Presidente?”.

Según el periodista, ni siquiera él tenía claro de qué se trataba la investigación sobre las zonas francas pues sólo Daniel Coronell como director conocía la investigación en su totalidad. Martínez le dijo a la FLIP: “Velásquez sólo lo podía haber sabido a través de interceptaciones ilegales”.

Según Fernando Tabares, Bernardo Moreno le dijo a Hurtado que “el interés del Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”.

No obstante, tanto Velásquez como otros miembros de Palacio, han negado rotundamente su participación en este tipo de interceptaciones. El 22 de febrero de 2010, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, archivó la investigación disciplinaria que había sido abierta contra Velásquez, tras considerar que no había méritos para proseguirla.

Por otra parte, en julio de 2010 se conoció la declaración de Fernando Tabares, ex director General de Inteligencia, muy reveladora en torno al espionaje ilegal que estaba realizando el DAS del periodista Daniel Coronel.

Según declaró Tabares ante la Fiscalía los días 9 y 13 de julio de 2010, en una oportunidad la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, le dijo que lo acompañara a una reunión que se llevó a cabo el 3 o el 7 de septiembre de 2007 (el ex funcionario no recordó la fecha exacta). En el encuentro aseguró Tabares que estaba el entonces secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno. Tabares sostuvo que en esa reunión, Moreno le dijo a Hurtado que “el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”. Según la declaración del ex funcionario, luego de esa reunión, Hurtado ordenó a sus subalternos atender la solicitud de Moreno y espiar a las personas mencionadas.

Durante la indagatoria de Hurtado en la Fiscalía, la ex funcionaria no se refirió específicamente a esta reunión, sin embargo, negó haber recibido órdenes de Palacio de interceptar y perseguir a las personas mencionadas por Tabares. Reconoció que tenía encuentros y contacto permanente con el secretario Moreno, pues era el delegado por el Presidente de la República para que fuera el enlace con el DAS, pero siempre para actividades enmarcadas en los procedimientos legales.

Moreno, por su parte, dijo en su indagatoria ante la Fiscalía el 28 de julio de 2010 que él sí se había reunido con Tabares y Hurtado para solicitar, de forma legal, información sobre congresistas y magistrados, pero negó haber pedido

Ante las acusaciones en su contra, Bernardo Moreno señaló: “espero con ansias la oportunidad de demostrar ante la jurisdicción y ante la comunidad, la absoluta transparencia de mi proceder”.

información sobre el periodista Coronell. Moreno dijo además que denunciará por injuria y calumnia a Tabares. En un comunicado público, el ex secretario agregó “espero con ansias la oportunidad de demostrar ante la jurisdicción y ante la comunidad, la absoluta transparencia de mi proceder”.

De otro lado, en su declaración ante la Fiscalía, la ex funcionaria Martha Inés Leal también se refirió a las actividades ilegales del DAS contra Coronell. Según lo declaró en audiencia del 25 de mayo de 2010, ella recibió órdenes del ex director Andrés Peñate, de espiar al director periodístico, que también escribe una de las columnas de opinión más leídas del país en la revista Semana.

Durante la audiencia de juzgamiento del 28 octubre de 2010, Leal aseguró que, según se lo dijo Peñate, “el presidente Uribe se encontraba muy molesto por las investigaciones que Coronell hacía contra él y su familia” y por eso necesitaba saber cuáles eran sus fuentes de información. Peñate niega los hechos y sostiene que Marta Leal solo está vinculándolo en los delitos para limpiar su nombre y justificar que le den el principio de oportunidad.

Carlos Lozano

Otra víctima de seguimientos minuciosos fue Carlos Lozano, director del semanario ‘Voz’. En el informe del CTI de abril de 2009 se encontraron 117 páginas reportando las labores de inteligencia al periodista. En ellas hay todo tipo de datos biográficos, personales y profesionales, incluyendo información financiera de las centrales de reporte (Data Crédito y Cifín). Así mismo, estaban referenciados sus números telefónicos y direcciones, y había fotos de la fachada de su residencia y oficina. Incluso, se encontró una tarjeta con sus huellas dactilares.

También se halló un memorando, con fecha del primero de julio de 2004, en el que Ovalle Olaz le solicitó al subdirector de operaciones del DAS, Hugo Daney Ortiz García, adelantar labores de inteligencia contra el periodista Lozano.

El ex funcionario Gustavo Sierra sostuvo que en varias oportunidades desde el DAS se enviaron informaciones falsas a los medios de comunicación para hacer ver al periodista Carlos Lozano como colaborador de las FARC.

Al igual que en los casos de Morris y Duque, en el allanamiento al DAS se encontraron fotocopias de documentos propios de la oficina de Protección Especial del DAS acerca de las medidas de seguridad de las que era beneficiario Lozano, como sus estudios de nivel de riesgo, informes de su esquema de seguridad y quejas de Lozano sobre este, entre otros.

Gustavo Sierra Prieto, ex subdirector de la Oficina de Análisis del DAS, dijo en declaraciones ante la Fiscalía a finales de octubre de 2010, que desde el DAS se realizaron campañas de desprestigio contra Lozano. Aseguró que la orden la dio la ex directora Hurtado. Sierra sostuvo que en varias oportunidades se enviaron informaciones falsas a los medios de comunicación para hacer ver al periodista como colaborador de la guerrilla de las FARC.

Gonzalo Guillén

Guillén es el corresponsal en Colombia del diario El Nuevo Herald de Miami y ha sido víctima de varias amenazas durante los últimos años, incluso tuvo que abandonar el país en 2007. Hasta ahora, ni las investigaciones judiciales, ni los diversos testimonios han dado información sobre el espionaje que se hizo desde el DAS a Guillén. Sin embargo, en noviembre de 2009 el periodista recibió una notificación de la Unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, donde le señalan que por información recolectada por la policía judicial, él sería presuntamente víctima de los seguimientos ilícitos hechos por el DAS.

El 6 julio de 2010, Guillén recibió un correo electrónico amenazante donde le dicen: “Somos DAS y no nos vamos a dejar joder por ustedes, sabemos cual es su investigador en Colombia y tienes (sic) 48 horas para que abandone Colombia o lo damos de baja como a una rata, lo tenemos ubicado se llama g guillen (sic)”. Además, le describieron dónde quedaba su apartamento en Bogotá y le advirtieron que tenían identificadas sus fuentes en el DAS.

Seis días más tarde, Guillén recibió otro correo del mismo destinatario donde le dicen, “anoche comprobamos que g guillen sique aqui... (sic) miren la foto q tomamos a donde vive anoche y ya sabiamos (sic) q le entregaron documentacion

La Procuraduría General de la Nación profirió fallo contra seis ex funcionarios de diferentes entidades por considerar que incurrieron en faltas disciplinarias en sus actuaciones relacionadas con el caso de las interceptaciones ilegales de periodistas.

(sic) ultrasecreta a fiscalia (sic) de correa, no digan q noles (sic) avisamos... le advertimos y este era en ultimo sviso (sic) para que abandonara el pais... (sic) el escogio... (sic)”. Junto al texto anexaron una foto del edificio del periodista. Por esos días Guillén publicó algunas notas sobre el espionaje que le hacía el DAS al presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Guillén le envió una carta al fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, con copia a varias organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión, notificándole la situación y anexando los correos. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha dado ninguna respuesta.

CAPÍTULO 4: AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES

Sanciones disciplinarias

La Procuraduría General de la Nación profirió fallo contra seis ex funcionarios de diferentes entidades por considerar que incurrieron en faltas disciplinarias en sus actuaciones relacionadas con el caso de las interceptaciones ilegales de periodistas.

El fallo, emitido el pasado 4 de octubre de 2010, sancionó a los María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno y el ex director de la UIAF Mario Aranguren con destitución y 18 años de inhabilidad en cargos públicos. Jorge Noguera y su subdirector José Miguel Narváez con destitución y 20 años de inhabilidad. Carlos Alberto Arzayúz, Fernando Tabares y Jorge Lagos con destitución y 15 años de inhabilidad. Andrés Peñate con suspensión del ejercicio de cargos públicos por ocho meses.

De otro lado, Fernando Brito, Procurador Tercero delegado ante el Concejo de Estado, emitió una sanción disciplinaria de seis meses de inhabilidad para cargos públicos contra Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, detective del DAS que habría participado en las actividades ilegales de inteligencia contra el periodista Hollman Morris.

El ex director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, aceptó que "dirigió, coordinó y tuvo conocimiento de las actividades ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".

Brito manifestó, en audiencia del 24 de septiembre de 2010, que la detective había cometido estas labores ilegales a sabiendas de que requerían una orden judicial, la cual no existía. Aún no se conocen avances en la investigación penal contra Rubio.

Fiscalía y Corte Suprema adelantan investigaciones penales

Las investigaciones penales por ahora han dado como resultado 18 resoluciones de acusación contra funcionarios que habrían incurrido en estos delitos. A dos personas ya se les fijó una pena y serán condenadas próximamente. Otros 52 ex funcionarios del DAS están siendo investigados.

Los ex funcionarios Jorge Lagos y Fernando Tabares realizaron cada uno un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación con el cual recibieron reducción de penas a cambio de aceptar cargos y confesar las actividades ilegales que cometieron. Los dos preacuerdos establecen ocho años de prisión y una multa de 44 salarios mínimos con vigencia de 2008.

Los cargos por los que fueron procesados son abuso de función pública, concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y prevaricato por acción. Ambos preacuerdos fueron revisados y aceptados por la jueza 14 penal de Bogotá y las condenas quedarán en firme en audiencias públicas que se realizarán próximamente.

En su confesión pública para acceder al preacuerdo, Lagos aceptó que "dirigió, coordinó y tuvo conocimiento de las actividades ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia". Añadió que estas actividades las realizó por orden de la ex directora Hurtado.

Por otro lado, los sindicatos Martha Inés Leal, Alba Luz Flórez y Germán Ospina se acogieron al principio de oportunidad. Se trata de una figura jurídica que permite que, si los imputados se convierten en testigos de la investigación y delatan a

La ex detective Alba Luz Flórez declaró que cuando le mostró a la ex directora Hurtado las grabaciones obtenidas, ésta la felicitó y le dijo “sentirse muy feliz” por las operaciones de inteligencia realizadas a la Corte.

otras personas que hayan participado en las actividades ilegales, se les procesará solamente por uno de los delitos que se les imputan.

La solicitud de acogerse a este principio que presentaron Leal, Flórez y Ospina, de manera individual, fue aceptada por la Fiscalía, por lo tanto sólo se les procesa por concierto para delinquir.

Así mismo, los ex funcionarios Gustavo Sierra y William Romero también presentaron dicha solicitud. En el caso de Sierra no fue aprobada su petición, mientras que Romero aún se encuentra a la espera de la respuesta de la Fiscalía.

Procesos contra los ex directores del DAS implicados

Hasta hoy, cinco ex funcionarios del DAS acusan a la ex directora María del Pilar Hurtado de haberles ordenado realizar interceptaciones, seguimientos y actividades de desprestigio contra periodistas, magistrados de la Corte Suprema y políticos.

Alba Luz Flórez, es conocida como la detective que infiltró a la Corte Suprema para grabar las sesiones de la sala penal en las cuales se investigaban a varios congresistas de la coalición de gobierno por mantener supuestos vínculos con paramilitares. También se conoció que Flórez pagó a varios funcionarios de bajo nivel de la Corte para obtener los expedientes de varios de los congresistas investigados.

La detective confesó estas actuaciones en su declaración ante la Fiscalía y señaló que todo se realizó por orden de Hurtado. Incluso, Flórez declaró que cuando le mostró a la ex directora las grabaciones obtenidas, ésta la felicitó y le dijo “sentirse muy feliz” por las operaciones de inteligencia realizadas a la Corte.

Otra de las declaraciones que apuntan a que Hurtado habría ordenado estas actividades es la de Martha Leal, quien explicó las labores de desprestigio que se llevaron a cabo en contra del magistrado Iván Velásquez. Leal dijo que Hurtado le pidió coordinar un montaje que se le iba a realizar al magistrado, el cual consistía

en que un paramilitar, apodado ‘Tasmania’, iba a hacer falsas acusaciones en contra del magistrado para imputarle cargos en su contra. Leal señaló que por orden de la ex directora se reunió con el abogado de ‘Tasmania’ en Medellín, con el fin de organizar el montaje. Esto ocurrió en el año 2008.

Una tercera declaración que implica a Hurtado es la de Gustavo Sierra. El ex funcionario dijo que la información relevante obtenida de las grabaciones a la Corte Suprema era llevada a miembros de gobierno a la propia sede de la Presidencia de la República. Según Sierra, para esto se destinaba a una mujer que llevaba una valija con el audio de las sesiones en discos compactos, además de documentos impresos de análisis.

Sierra también aseguró que en una oportunidad se dio cuenta de que las sesiones de la Corte estaban siendo grabadas así que le preguntó a Hurtado si lo estaban haciendo con orden judicial. Hurtado sólo le respondió que esas grabaciones se iban a seguir haciendo y que necesitaba que él también le ayudara en ello. Sierra agregó: “yo le dije que me parecía muy riesgoso. Se disgustó y me dijo que yo era un miedoso”.

Los otros dos funcionarios que implican a Hurtado son Jorge Lagos y Fernando Tabares, como ya se mencionó anteriormente.

Por otro lado, además de estos cinco testimonios, hay otras pruebas que implican a Hurtado. La Fiscalía tiene algunos correos electrónicos en los que la ex directora da órdenes a varios de sus subalternos, entre ellos Martha Leal, de realizar seguimientos a la Corte Suprema.

En uno de los correos, Leal responde a Hurtado acerca de una solicitud de averiguar sobre los bienes del magistrado Julio Valencia Copete y su abogado, Ramiro Bejarano. En el mensaje Leal dice: "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble en la carrera (...) apartamento (...), registrado en la notaria 11. Así mismo el señor Valencia Copete César Julio registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes

La ex directora Hurtado ha insistido en que nunca ordenó operaciones ilegales de inteligencia y, que si estas ocurrieron, sus subalternos las hicieron sin su consentimiento.

notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad". El mensaje fue enviado el 2 de abril de 2008 a las 12:15 de la tarde.

En su indagatoria ante la Fiscalía, del 13 y 14 de julio de 2010, Hurtado señala que ella nunca ordenó hacer seguimientos, espionaje ni labores de desprestigio.

Hurtado reconoció que en el DAS había infiltrado fuentes humanas al interior de la Corte Suprema, pero con el propósito de “conseguir información que permitiera mejorar la seguridad de los magistrados, conocer de posibles infiltraciones, proteger su vida o conocer sobre actos de corrupción”. Aseguró, además, que nunca había tenido conocimiento de la infiltración que la detective Alba Luz Flórez hizo a la Corte Suprema, un hecho del que se vino a enterar sólo hasta que fue destapado por los medios de comunicación en 2010.

También aseguró que las labores de inteligencia a la senadora Piedad Córdoba estaban justificadas en la mediación que ésta realizaba con la guerrilla de las FARC y que de esto estaba enterado el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero que no ordenó seguimientos ni interceptaciones de comunicaciones.

Por otro lado, cuando fue preguntada sobre el desplazamiento que hicieron varios detectives hasta Neiva para hacer seguimientos a varios magistrados que se trasladaron a esa ciudad, Hurtado aceptó que los viáticos de esa operación fueron cancelados por el rubro de gastos reservados, pero declaró que “no tengo conocimiento quién habría ordenado esos desplazamientos”.

Así mismo negó haber pasado información a los medios de comunicación para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, como los había asegurado el testimonio de Gustavo Sierra.

Hurtado ha insistido en que nunca ordenó operaciones ilegales de inteligencia y, que si estas ocurrieron, sus subalternos las hicieron sin su consentimiento.

Hurtado salió del país y buscó asilo político en Panamá alegando que la justicia colombiana no le ofrecía garantías. El gobierno panameño se la concedió la

“Nadie puede sostener ante un tercer país que en Colombia no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente”: Presidente Santos.

primera semana de noviembre de 2010. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, negó que sea cierto que en Colombia no haya garantías para los investigados: “Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente. Tenemos libertad de poderes y el Estado está en capacidad de proteger a quienes lo necesiten. Por consiguiente, no hay razones para decir lo contrario”, señaló el mandatario.

Una semana después, el 26 de noviembre de 2010, la Fiscalía solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Hurtado y Bernardo Moreno, en la cual se solicitaría la medida de aseguramiento (detención) contra estos dos ex funcionarios. La audiencia había sido programada para el 13 de diciembre de 2010. Los delitos imputados fueron abuso de función pública, concierto para delinquir, falsedad en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

Sin embargo, el pasado 2 de diciembre, en la reunión de empalme entre el fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, y la fiscal General electa, Vivianne Morales Hoyos, se acordó que la Fiscalía retirará la imputación de cargos contra estos ex funcionarios. Esta decisión se tomó con el fin de que la nueva Fiscal conozca el caso, evalúe las pruebas y sea ella quien decida si se amerita la imputación o no.

De ordenada la detención de Hurtado la Fiscalía podría realizar un pedido de extradición, sin embargo, se desconoce si el gobierno lo tramitará formalmente ante las autoridades panameñas.

De otro lado, Felipe Muñoz Gómez, director actual del DAS, quien se había posesionado tan solo días antes de que estallara el escándalo en febrero de 2009, es actualmente investigado disciplinariamente por la Procuraduría, por la presunta destrucción de material fruto de interceptaciones ilegales. Además, la Fiscalía le adelanta una investigación preliminar por estos mismos hechos.

Según la ex funcionaria Leal, el ex director Peñate le había ordenado los seguimientos al periodista Daniel Coronell, porque “el presidente Uribe se encontraba muy molesto por las investigaciones que Coronel hacía contra él y su familia”.

La ex detective Alba Luz Flórez señaló en declaraciones a la revista Semana y Noticias Uno, que Muñoz tenía pleno conocimiento de las actividades ilegales que ocurrían al interior del DAS. Sin embargo, Flórez hizo estas acusaciones solamente en las entrevistas que concedió a estos medios de comunicación, pero no lo hizo en su testimonio rendido ante la Fiscalía.

Ante este señalamiento Muñoz dijo a la FLIP que se trata de una “absoluta mentira”. El actual director del DAS asegura que Flórez tiene motivos personales para mentir en su contra, pues él fue quien la declaró insubsistente para su cargo dentro del DAS y la denunció para que se iniciaran las investigaciones penales contra ella. Asegura que bajo su dirección se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales cualquier información relacionada con el espionaje.

En el caso de Andrés Peñate Giraldo, Martha Inés Leal hizo graves acusaciones en su contra. Según la versión de la ex subdirectora de Operaciones, Peñate tenía total conocimiento de las actividades de espionaje y seguimiento que se venían realizando desde la época de Noguera. La señora Leal fue más allá y afirmó que Peñate le había ordenado los seguimientos al periodista Daniel Coronell, porque, según él “el presidente Uribe se encontraba muy molesto por las investigaciones que Coronel hacía contra él y su familia”, por lo tanto el mandatario quería saber cuáles eran las fuentes periodísticas de Coronell. Leal también añadió que los seguimientos a la entonces senadora Piedad Córdoba también habían sido por solicitud del ex director del DAS.

En declaraciones posteriores, Peñate le salió al paso a los señalamientos de Leal y aseguró que la ex funcionaria está mintiendo. El ex director señaló: "Es una sarta de mentiras. El principio de oportunidad le permite pasar de ser acusada a testigo. Es conseguir impunidad a costa de hacer imputaciones falsas contra otros (...) El presidente (Uribe) nunca me dio esas instrucciones, nunca me dijo lo que ella afirma. Nunca me dijo: espiemos a la oposición, a Daniel Coronell, a Piedad Córdoba”.

Respecto a la afirmación de Leal de que Peñate había dado órdenes de espiar al periodista Coronell, él afirmó que “Daniel Coronell no estaba en Colombia cuando

Según la Fiscalía, Noguera suministró a paramilitares datos de sindicalistas que luego fueron asesinados.

yo era director del DAS”, haciendo alusión al periodo en que el periodista estuvo exiliado.

No obstante, Peñate, siendo director del DAS, coincidió dos meses con Coronell luego del regreso de este último al país: Coronell llegó a Colombia el 29 de junio de 2007 y Peñate dejó su cargo en el DAS en agosto de ese mismo año.

El de Leal no es el único testimonio que lo compromete. En su declaración ante la Fiscalía, el ex subdirector de la Oficina de Análisis, Gustavo Sierra, también juró que Peñate ordenaba el espionaje a algunos personajes incluyendo los magistrados de la Corte Suprema. Sierra añadió que Peñate fue quien implementó la estrategia de la valija (método copiado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA) para llevar la información sensible de la Corte a funcionarios del Palacio de Nariño.

Actualmente Andrés Peñate está vinculado formalmente a la investigación y el próximo 2 de diciembre de 2010 rendirá interrogatorio.

En cuanto a Jorge Noguera, la Fiscalía General de la Nación lo acusó de haber suministrado a paramilitares datos de sindicalistas que luego fueron asesinados. Así mismo, indicó que Noguera protegió a paramilitares para que no fueran capturados por otras entidades, como la Policía. El ente acusador también señaló que Noguera ordenó en el DAS realizar amenazas, operaciones ilegales de inteligencia y campañas de desprestigio. Se le imputaron los delitos de homicidio agravado, concusión, concierto para delinquir y cohecho. El proceso está en etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía pidió su condena.

Acusaciones contra funcionarios del Palacio

Aparte de haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría, al ex secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, enfrenta una investigación penal por su presunta participación en las actividades de

Al ex presidente de la República Álvaro Uribe le fue abierta una investigación preliminar por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para determinar si tuvo participación en estas actividades ilegales.

espionaje ilegal del DAS. Según las denuncias, Moreno fue el enlace entre el Palacio de Nariño y el DAS en este tipo de actividades.

El ex director de Inteligencia, Fernando Tabares, aseveró que Moreno había participado en una reunión con la ex directora María del Pilar Hurtado, en la cual el funcionario de la Casa de Nariño pidió que espieran al periodista Coronell, los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, y los magistrados de la Corte Suprema. Según Tabares, Moreno dijo que era información que requería el presidente Uribe. El fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó consideró que Moreno se extralimitó en sus funciones al hacer estos requerimientos a Hurtado.

En su indagatoria ante la Fiscalía rendida el 28 de julio de 2010, Moreno negó estas acusaciones. Dijo respecto al episodio de la reunión con Tabares y Hurtado, que él efectivamente hacía con frecuencia requerimientos de forma legal al DAS sobre magistrados, pues era parte de sus funciones como secretario General y enlace de la Presidencia con ese organismo de inteligencia. Sin embargo, negó haber ordenado actividades ilegales.

La Fiscalía programo una audiencia de imputación de cargos para el 13 de diciembre de 2010, donde se decidirá si le dictan medida de aseguramiento.

El ex secretario de Prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez, también es investigado por la Fiscalía, a pesar de haber sido absuelto en la investigación disciplinaria de la Procuraduría. El pasado 19 de octubre de 2010 la Fiscalía lo llamó a interrogatorio, pero aún no se ha llevado a cabo la diligencia. Actualmente Velásquez es embajador de Colombia ante el Vaticano.

Por último, al ex presidente de la República Álvaro Uribe le fue abierta una investigación preliminar por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para determinar si tuvo participación en estas actividades ilegales.

La Comisión decidió abrir la investigación luego de unas declaraciones de Martha Leal ante la Fiscalía que involucrarían al ex Presidente. Según Leal, el ex director

Uribe respaldó la solicitud de asilo que hizo María Pilar Hurtado en Panamá, según él, por falta de garantías judiciales. Además insistió en que durante su gobierno “jamás sugerí una actividad ilegal”.

Andrés Peñate le dije ordenó que realizara labores de inteligencia contra Daniel Coronell y que era una solicitud del presidente Uribe. Peñate ha negado haber recibido esta directriz de Uribe y, por lo tanto, negó haberla transmitido a Leal.

El ex Presidente ha señalado en varias oportunidades que su gobierno nunca ordenó al DAS actividades ilícitas de inteligencia e, incluso, ha salido en defensa de funcionarios como Bernardo Moreno, Mario Aranguren y María del Pilar Hurtado.

En declaraciones dadas a la FLIP el 15 de febrero de 2010, Uribe señaló que “quien intercepte ilegalmente periodistas es enemigo de mi gobierno”. Posteriormente, en un comunicado público emitido el 23 de noviembre, Uribe respaldó la solicitud de asilo que hizo María Pilar Hurtado en Panamá, según él, por falta de garantías judiciales. Además insistió en que durante su gobierno “jamás sugerí una actividad ilegal” y que las imputaciones contra miembros de su gobierno son “basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales”.

Otros investigados

Luego de que la Procuraduría solicitara que fuera investigada penalmente la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez, la Corte Suprema le abrió investigación porque presuntamente utilizó información obtenida a través de seguimientos ilegales para realizar un debate contra la ex senadora Piedad Córdoba en el Congreso de la República.

De otro lado, el ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, se encuentra privado de la libertad tras ser acusado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en las actividades ilegales del DAS. Según la resolución de acusación, Aranguren habría utilizado sus facultades de hacer seguimientos bancarios para espiar ilegalmente las finanzas de periodistas, magistrados y políticos, y entregar esa información al DAS.

¿Qué es el derecho al acceso a la información pública?

Es el derecho que protege la facultad de comunicar y de recibir información del Estado, para poder así contribuir con un debate de ideas libre y democrático, que permita garantizar la transparencia en la gestión pública. Es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 74 de la Constitución Política y por varios instrumentos de derecho internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CAPÍTULO 5: PROBLEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO DEL CASO

“Si nosotros hubiéramos utilizado sólo derechos de petición, no tendríamos toda esta información del caso DAS: periodista del diario El Espectador.

A raíz de las interceptaciones y seguimientos ilegales realizados por el DAS, se han adelantado varias investigaciones y procesos penales en contra de los presuntos responsables. Dado que aún existen investigaciones en curso, alguna información se considera reservada con el fin de no entorpecer la administración de justicia. Sin embargo, actualmente hay un debate sobre el carácter reservado, o no, de las grabaciones de audiencias penales que se desarrollan a puerta cerrada.

Problemas en el acceso a la información en el proceso judicial contra Jorge Noguera Cotes

El 3 de marzo y el 13 de abril del 2010, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) restringió el acceso de la prensa a las audiencias públicas en las cuales rindieron testimonio Martha Leal Llanos, ex subdirectora de Operaciones del DAS y Juan Carlos Sánchez Candia, detective de la entidad.

Dichas audiencias se llevaron a cabo en un proceso penal que contra el ex director del DAS, Jorge Aurelio Noguera, por hechos ocurridos durante su administración del 2002 al 2006.

Según la normatividad penal vigente, los jueces tienen la facultad de restringir el acceso a las audiencias en algunos casos previstos en la ley. Para estas audiencias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohibió la presencia de los reporteros. Una vez terminadas, algunos periodistas solicitaron copia de la grabación de la audiencia, petición que fue negada por la Corte. Según el Tribunal, se negaba la grabación para proteger la seguridad personal de los testigos.

Unos días después, la FLIP elevó dos peticiones de información ante esta Corporación solicitando dichos documentos (10 de marzo de 2010 y 9 de junio de

La Corte Suprema sostiene que debió restringir el acceso a las audiencias públicas en las cuales rindieron testimonio Leal Llanos y Sánchez Candia, pues había razones de seguridad personal y familiar que indicaban la necesidad de esta restricción.

2010); argumentando que si bien es necesario proteger la integridad de los testigos, no es posible que haya información secreta durante una audiencia de juzgamiento en un proceso penal, pues es de interés público conocer los hechos que sucedieron en una entidad pública como el DAS, pero además, porque existen otras medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los testigos, diferentes a negar el acceso a la información.

La Corte Suprema respondió las solicitudes de la FLIP negando la entrega de las grabaciones mencionadas. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que en un proceso penal, que es de naturaleza pública, no pueden existir pruebas secretas u ocultas (Corte Constitucional, sentencia C-1260/05).

‘La reserva de la audiencia se extiende a la grabación de la misma’

La Corte Suprema sostiene que debió restringir el acceso a las audiencias públicas en las cuales rindieron testimonio Leal Llanos y Sánchez Candia, pues había razones de seguridad personal y familiar que indicaban la necesidad de esta restricción. Leal había solicitado que se retirara la prensa de la audiencia, teniendo en cuenta las amenazas de muerte que había recibido.

La Corte negó la entrega de las grabaciones de dichas audiencias con base en dos leyes. En primer lugar, menciona los artículos 67 y 70 de la ley 418 de 1997, los cuales se refieren al ‘Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía’. En segundo lugar, trae a colación el artículo 342 de la ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual el juez podrá ordenar “que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical”.

Estas normas indican que los testigos que declararon en el proceso penal contra Noguera tienen derecho a solicitarle al Estado medidas de protección por amenazas contra su vida o integridad. Sin embargo, la ley no establece que las

La ley no establece que las grabaciones de las declaraciones de los testigos, en un proceso penal, se conviertan en reservados.

grabaciones de las declaraciones de los testigos, en un proceso penal, se conviertan en reservados.

Germán Suarez, profesor de la Universidad de la Sabana y experto en acceso a la información, dice que no comparte la decisión de la Corte porque tanto “la jurisprudencia nacional como la internacional, establecen claramente que la reserva de un documento debe imponerla la ley. En este caso a pesar que las normas que se invocan tiene la categoría de ley, éstas no establece una reserva sino una obligación de protección”.

Asimismo, la CSJ sostiene que, teniendo en cuenta las normas mencionadas y la facultad de realizar una audiencia en reserva, “no resulta lógico” dar copia de la grabación de las audiencias. Al respecto, la FLIP considera respetuosamente que el hecho de realizar una audiencia pública a puertas cerradas no implica que se pueda negar el acceso a la grabación de la misma. En otras palabras, la Fundación considera que jurídicamente es distinto negar el acceso a una audiencia penal, a negar el acceso a la grabación de la misma y por consecuencia a lo que allí se dijo.

Frente a este tema, Suarez dijo que no considera “que las conclusiones simplemente lógicas puedan prevalecer sobre el mandato constitucional que exige que la reserva sea impuesta por mandato legal”.

Por su parte, el abogado Jaime Bernal Cuéllar, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, sostuvo que las reservas “apuntan a una verdadera finalidad y la finalidad para que se aplique la reserva es que no exista obstrucción, manipulación de la misma investigación”. Bajo el entendido de que se “esté lesionando otro derecho, un riesgo para la vida del testigo, por ejemplo”. Esta limitación al acceso a la información “se puede suplir con la protección que el Estado tiene la obligación de darle al testigo” por lo cual se entendería que se puede permitir el acceso al documento, una vez se esté dando una efectiva protección, en este caso, al derecho a la vida y a la integridad personal de los testigos contra quienes hay amenazas.

Finalmente, la Corte afirma que la obligación de proteger la integridad de un testigo, prima “indiscutiblemente” sobre el acceso a la información pública de la

La jurisprudencia ha sostenido que las reservas “deben ser establecidas en la ley, de manera clara, expresa, taxativa, previa y precisa”: Corte Constitucional.

ciudadanía. Con respecto a este punto, es importante rescatar la importancia de preservar la vida e integridad de los testigos. Esta protección es un asunto que no guarda relación con el silencio al cual se vería enfrentada la ciudadanía en el caso DAS. La falta de información sobre un caso tan importante, obstaculiza la posibilidad de que los colombianos conozcan las anomalías que se dieron en una entidad del Estado y donde fueron víctimas miembros fundamentales de una sociedad democrática, como lo son los magistrados de la rama judicial, políticos de oposición y periodistas independientes.

‘No puede haber pruebas secretas en un proceso penal’

La FLIP no comparte respetuosamente los argumentos de la Corte. Si bien la Corte se sustenta en leyes para negar la información, como lo exige el artículo 74 de la Constitución, esas normas no contienen reserva aplicable al caso. Esos artículos que menciona la Corte, indican algunas formas de solicitar protección a testigos de procesos penales y las autoridades sobre las cuales recaen dichas obligaciones. Sin embargo, no establecen que la grabación de una audiencia penal desarrollada a puerta cerrada sea reservada. En otras palabras, no establece la posibilidad de juzgamientos penales ocultos.

La jurisprudencia ha sostenido que las reservas “deben ser establecidas en la ley, de manera clara, expresa, taxativa, previa y precisa” (Corte Constitucional, sentencia T-391/07). En este caso, los artículos en que se ampara la Corte Suprema son generales y abstractos; además no se menciona expresamente una reserva en la ley. Es decir, que no se cumplen con los requisitos jurisprudenciales, por lo cual la CSJ debería entregar la información pública solicitada.

La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que una limitación al acceso a la información debe “presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa” (Corte Constitucional, sentencia T-391/07). Por lo tanto, resulta cuestionable la posición de la CSJ según la cual “indiscutiblemente” el derecho de acceso a la información debe ceder frente a otros derechos.

**La opinión pública
tiene el derecho a
reprochar los
comportamientos
ilegales ocurridos en el
DAS, y asimismo, velar
para que los mismos
no queden en la
impunidad.**

Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, ha sido afectada directamente por estas limitaciones al acceso a la información pública. Al respecto, ella sostiene que “el llamado escándalo de las chuzadas ha dejado al descubierto grandes vacíos en materia de acceso a la información de los periodistas. La Corte Suprema de Justicia ha negado en forma sistemática y sin razón alguna copias de los audios de las sesiones reservadas del juicio a Jorge Noguera (...) En la Corte se ha llegado al punto de obstaculizar el derecho de acceso a la información de los periodistas incluso para aquellos documentos sobre los cuales no ha sido decretada la reserva sumarial”.

Así mismo, Duque dijo que “más grave resulta aún, el hecho de que todas las solicitudes de los periodistas son incluidas a los expedientes, con lo cual personas amenazadas y perseguidas por el DAS, como es mi caso, quedamos al descubierto frente a quienes han sido nuestros victimarios”.

La jurisprudencia ha sostenido que “en relación con el principio de publicidad, la prueba no puede ser practicada de manera secreta u oculta, sino de cara al imputado y a la sociedad” (Corte Constitucional, sentencia C-591/05). En este orden de ideas, la sociedad colombiana, como en cualquier otra democracia, tiene derecho a conocer qué fue lo sucedido en este capítulo de la historia nacional.

La opinión pública tiene el derecho a reprochar los comportamientos ilegales ocurridos en el DAS, y asimismo, velar para que los mismos no queden en la impunidad. El conocimiento integral y público de las audiencias, contribuirá a la transparencia del juicio y a garantizar los derechos de los procesados.

La opinión pública vino a conocer el testimonio de Leal durante la audiencia, gracias a la filtración que hicieron los medios y no porque se haya respondido a una solicitud de información haciendo uso de las herramientas jurídicas existentes.

La filtración de unos testimonios y no de otros, puede sesgar la opinión y da conocer parcialmente la verdad de lo sucedido. La única forma de saber todo, es contando con la información necesaria para conocer los hechos, sus repercusiones y evitando que se repitan. Por esto, es importante conocer las pruebas en los

La mayor parte de la información que ha conocido la opinión pública sobre los avances de las investigaciones en el caso DAS, se ha logrado conseguir gracias a la filtración en los medios.

procesos penales del caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales de DAS y que tienen como víctimas a varios periodistas, entre otros.

La mayor parte de la información que ha conocido la opinión pública sobre los avances de las investigaciones en el caso DAS, se ha logrado conseguir gracias a la filtración en los medios de comunicación. Esto se da principalmente, porque si los periodistas utilizan los recursos judiciales existentes (derechos de petición, acceso a la información), sus solicitudes son negadas. Una práctica lamentable que afecta el derecho de los ciudadanos a conocer toda la verdad de lo sucedido.